

el delito de tentativa de robo. Visto el veredicto del jurado que los declaró culpables, con las circunstancias agravantes de haberse pretendido cometer el robo con horadacion y en cuadrilla; teniendo presente lo que previenen los artículos 47, fraccion 3ª, y 41, fraccion 2ª de la ley de 5 de Enero de 1857, fallo: que debia de condenar y condeno á los referidos Antonio Mercado, Pedro Ortega ó Carlos García, y Luis Vallejo, Valentin ó Caralampio Ortiz, á la pena de diez años de presidio en el lugar que designe el Supremo Gobierno, contados desde el 26 de Agosto del año próximo pasado, dia de su formal prision. Hágase saber y remítase esta causa á la segunda sala del superior Tribunal de Justicia para su revision. Así juzgando definitivamente lo mandó y firmó el ciudadano juez 5º del ramo criminal. Doy fé.—*José María Castellanos*.—*V. Canalizo*, secretario.

Los reos apelaron de este auto, notificado que les fué, y remitida la causa al Superior, se pronunció la sentencia que sigue:

México, Mayo 12 de 1871.

Vista esta causa, instruida por el ciudadano juez 5º del ramo de lo criminal, contra Antonio Mercado, Pedro Ortega ó Carlos García (á) el Encuerado ó el Güilote, y Luis Vallejo ó Caralampio Ortiz, por el robo intentado verificar en la calle del Hospicio de San Nicolás número 24, la noche del 22 al 23 de agosto de 1870. Vistos: el veredicto del jurado que calificó los hechos el 25 de Abril último, y la sentencia del juez que condenó á los encausados á la pena de diez años de presidio en el lugar que designe el Supremo Gobierno, y contados desde el dia 26 de Agosto de 1870, de cuya sentencia apelaron los reos; atentos los apuntes presentados por el ciudadano fiscal 1º en esta instancia, y lo expuesto por el Lic. D. Manuel Dufó, defensor de Pedro Ortega. Considerando: que el jurado declaró culpables á Antonio Mercado, Pedro Ortega ó Carlos García, y Luis Vallejo ó Caralampio Ortiz, del conato de robo de la casa número 24 del Hospicio de San Nicolas, perpetrado este conato la noche del 22 al 23 de Agosto próximo pasado; con las circunstancias de haberse dejado de verificar el robo por causas independientes de la voluntad de los acusados, quienes pretendieron verificarlo por medio de horadacion y reunidos mas de tres malhechores, sin que conste que Vallejo ó Ortiz haya cometido otros delitos de esta naturaleza, por lo que la sentencia del juez es arreglada á derecho. Por unanimidad y con fundamento de los artículos 41, fracción 2ª, y 46 de la ley de 5 de Enero de 1857: se confirma la sentencia del juez

que condenó á Antonio Mercado, á Pedro Ortega ó Carlos García, y á Luis Vallejo, Valentin ó Caralampio Ortiz á la pena de diez años de presidio, los que extinguirán en el lugar que designe el Supremo Gobierno, contados desde el dia en que se decretó su formal prision. Hágase saber, y con copia de este auto, vuelva la causa al juzgado de su origen para su ejecucion y archivo; diciéndose al juez que, en concepto de la sala, no debió sujetar al jurado la pregunta 7ª del veredicto, sobre si Luis Vallejo ó Caralampio Ortiz cometió otros dos delitos de esta misma naturaleza; porque esta circunstancia no es de las que acompañan á los delitos, que son las únicas que deben sujetarse al jurado, como lo expresan los artículos 26 y 27 de la ley de 15 de Junio de 1869, de los que en el primero se dice que la primera pregunta se hará sobre la culpabilidad del hecho, y la segunda y posteriores sobre si en el mismo hecho ha intervenido tal circunstancia agravante, etc.; y la reincidencia no es circunstancia que interviene en los hechos, aunque se deba tener presente en la sentencia para agravar la pena, al aplicar la cual, debe tenerse en consideracion, cuando aparezca que por la verdad irrevisable de un jurado ó la ejecutoria respectiva, hayan declarado al procesado reo de los mismos delitos en otras causas que se le hubiesen instruido. Así lo proveyeron los ciudadanos ministros que forman la segunda Sala del Tribunal Superior, y firmaron.—*Teófilo Robredo*.—*Joaquin Antonio Ramos*.—*Agustin G. Angulo*.—*Emilio Monroy*, secretario.

JUZGADO 1º DE LO CRIMINAL.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO.

SEGUNDA SALA.

Sobreseimiento.—En los delitos públicos debe procederse de oficio, y no ha lugar á sobreseer, aunque se desista el acusador.—Comete falsedad el que fraudulentamente se muda el nombre ó apellido en un instrumento que otorga, para que aparezca otorgado por otra persona.

México, Abril 27 de 1871.

Vistas estas actuaciones, instruidas en el juzgado 1º de lo criminal contra M. M., á consecuencia de la acusacion que en 4 de Enero último le hizo el súbdito español D. D. L. por falsario, y haberle estafado con abuso de confianza, de doscientos á trescientos pesos, cuya suma la aumentó en la foja 100 vuelta, á trescientos diez y seis pesos, cinco reales. Vistos el desistimiento del acusador que contiene el escrito de 7 de Marzo último, la ratificacion

que hizo de su contenido, la conformidad del acusado, y el auto del juez de 20 del mismo Marzo, en que mandó sobreseer en la averiguacion. Considerando: que el acusado, para lograr el fin que se propuso, no solo se valió de documentos falsos privados, sino tambien de un instrumento público, como lo es sin disputa el expediente formado en el juzgado 6º de lo civil de Puebla, que obra de fojas 72 á la 76; en el cual resulta de la averiguacion, que si bien intervinieron el juez y el escribano que en él se expresan, no sucedió lo mismo respecto de las demas personas que figuran, quienes no existen ni han existido, siendo lo cierto que M. M. presentó á un supuesto M. L., y se mudó fraudulentamente el apellido de M. por el de R. para que apareciera otorgado el instrumento por otra persona, con lo que dió el escándalo de engañar á la autoridad judicial, y de consiguiente está en el caso 6º de los que enumera Escriche, palabra «Falsedad,» y tambien en el previsto en la ley 2ª, tit. 7, Part. 7ª, vers. «Otro si faze falsedad.» Con fundamento de las doctrinas de los autores, que justamente enseñan que debe precederse de oficio en los delitos públicos, y por unanimidad: Primero, se revoca el auto de 20 del próximo pasado, que mandó sobreseer, y se devolverán las diligencias al juzgado de su origen, para que en estado las someta á la decision del jurado. Hágase saber, y con testimonio de este auto remítanse al juez los relativos para los efectos indicados.

Así lo proveyeron los ciudadanos ministros que forman la 2ª Sala del Tribunal Superior, y firmaron: *Teófilo Robredo*.—*Joaquin Antonio Ramos*.—*Agustin G. Angulo*.—*Emilio Monroy*, secretario.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO.

PRIMERA SALA.

Resultado de la declaracion de nulidad del veredicto, publicado en la entrega 21, sábado 27 de Mayo de 1871.—No hay repugnancia entre las ideas de riña y propia defensa.—El juez de derecho debe apreciar las declaraciones del jurado en su sentido literal, y no buscar el que pudiera dárselos segun las constancias del proceso.

México, 12 Mayo de 1871.

Vista esta causa instruida contra Antonio y

Zacarias García, por el homicidio de José Montoya, el veredicto del jurado, de 27 de Marzo del presente año, en que declaró culpables á los expresados García del homicidio: que el hecho se cometió en riña: que fué de noche, con arma corta: que no hirieron á Montoya rendido éste, y que fué en propia defensa; la sentencia pronunciada por el juez 6º de lo criminal, en que en vista del veredicto, y con fundamento del final del art. 30 de la ley de 5 de Enero de 1857, mandó poner á los citados Antonio y Zacarias García en libertad bajo de fianza; el auto de la 2ª Sala de este Superior Tribunal, de 14 de Abril próximo pasado, en que, por considerar que hay contradiccion en el veredicto, y con fundamento de la fraccion 5ª del art. 58 de la ley de 15 de Junio de 1869, declaró que habia motivo de nulidad en el veredicto pronunciado por el jurado; lo pedido en esta instancia por el ciudadano fiscal; lo alegado por el defensor de los acusados, con lo demás que ver convino. Considerando: que la nulidad del expresado veredicto se hace consistir en la notoria contradiccion que, se dice, hay entre las declaraciones que hizo el jurado, de haber sido ejecutado el homicidio en riña, y en propia defensa. Considerando: que no hay esa contradiccion, porque no existe repugnancia entre las ideas de riña y propia defensa; y Considerando por último: que el juez de derecho, debe apreciar las declaraciones del jurado en su sentido literal, y no buscar el que pudiera haberles dado, atentas las constancias del proceso, pues de no ser así se minará por su base la institucion del jurado. Por tales consideraciones, y con fundamento del art. 58 de la ley de 15 de Junio de 1869: se declara válido el referido veredicto, pronunciado por el jurado que conoció de la causa seguida contra Antonio y Zacarias García, en 22 de Marzo del presente año. Hágase saber, y devuélvase la causa á la 2ª Sala con testimonio de este auto, para los efectos legales.

Así por mayoría lo proveyeron los ciudadanos Presidente y magistrados que forman la 1ª Sala del Tribunal Superior de Justicia del Distrito, y firmaron: *Manuel Posada*.—*Miguel Castellanos*.—*Pablo M. Rivera*.—*Eduardo Artega*.—*José María Herrera y Zavala*.—*Ciro P. de Tagle*, secretario.

LEGISLACION

SECRETARIA DE ESTADO Y DEL DESPACHO
DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO.

El Presidente de la República se ha servido aprobar el siguiente REGLAMENTO económico para esta secretaría.

[CONTINUA.]

Art. 30. Recibirá y abrirá la correspondencia oficial que se dirija al Ministro: la hará repartir á las secciones despues de acordar su trámite, previa la toma de razon que verificará el oficial de partes.

Art. 31. Llevará al acuerdo del oficial mayor 1º los negocios que por su carácter requieran consulta ó resolucio superior, en las horas señaladas previamente, siempre que el asunto no fuere urgente.

Art. 32. Revisará diariamente los libros del oficial de partes y los firmará en prueba de conformidad.

Art. 33. Firmará recibo en el libro de conocimientos, que llevará cada seccion, expresando el número de sus fojas, estado, etc., de los expedientes que se le entreguen.

Art. 34. Cuidará de que no falten los útiles, muebles y demás objetos necesarios para el servicio.

Art. 35. Ejercerá especial supervigilancia sobre los empleados de la Secretaría en el cumplimiento de sus deberes respectivos.

Art. 36. Propondrá verbalmente al oficial mayor primero, para que éste lo haga al Ministro, las promociones y nombramientos de empleados del Ministerio, licencias, remociones, hojas de servicios.

Art. 37. Cuidará de conservar en un libro los acuerdos económicos del Ministro, despues de haberlos comunicado á las secciones.

Art. 38. Depositará igualmente los decretos autógrafos, haciéndolos empastar y colocar en la biblioteca.

Art. 39. Revisará las pruebas de las leyes y decretos confrontándolos con los autógrafos.

Art. 40. Cuidará de la biblioteca de la Secretaría.

Art. 41. Tendrá la obligacion de imponerse de los decretos que remitan los Estados, para

que en caso de que entorpezcan la marcha administrativa ó se opongan á las leyes generales en materia de hacienda, promueva lo que corresponda.

Art. 42. En sus faltas será sustituido por el jefe de seccion que designe el Ministro.

CAPITULO IV.

DE LOS GEFES DE SECCION.

Art. 43. Los gefes de seccion tienen la responsabilidad y la direccion de los ramos que estén á su cargo, bajo la dependencia del Ministro.

Art. 44. Tienen obligacion de promover todo lo que crean necesario al mejor servicio de sus ramos, cuyo acuerdo solicitarán del Ministro ú oficiales mayores.

Art. 45. Tienen igualmente obligacion de hacer reflexiones á los acuerdos que en su concepto las merezcan, por estar en contradiccion con alguna ley, disposicion ó práctica establecida y adoptada como buena, y de consignarlas por escrito, cuando hechas no queden salvadas por el superior, cumpliendo sin dilacion el acuerdo.

Art. 46. Cumplirán y harán cumplir las obligaciones que les son propias, y tendrán en su seccion las mismas atribuciones y deberes que impone este Reglamento á los oficiales mayores respecto á la secretaría, en el punto económico.

Art. 47. De acuerdo con el oficial mayor 1º distribuirán los ramos que tienen á su cargo entre los empleados de la seccion, en un orden diferente al que se establece en este Reglamento, siempre que hubiere motivo suficiente para ello, consignando á cada uno el ramo ó ramos que se le encarguen para su despacho; sin que por ningun motivo deje de cumplirse esta prevencion, que tiende á establecer el orden y buen servicio de la oficina: esto no obsta para el auxilio mutuo que deben prestarse los empleados y aun las secciones entre sí, cuando el recargo de labores ó trabajos extraordinarios lo requieran, á juicio del jefe de la seccion en el primer caso, y del oficial mayor en el segundo.

(CONTINUARÁ.)

EL DERECHO

PERIÓDICO DE JURISPRUDENCIA Y LEGISLACION

SEGUNDA ÉPOCA.

S'il n'y avait pas de justice,
il n'y aurait ni gouvernement ni société.
EDOUARD LABOULAYE.

TOMO I.

MÉXICO: SÁBADO 17 DE JUNIO DE 1871.

NÚM. 24

DERECHO TRANSITORIO.

Informe del señor juez 4º de lo civil de esta capital, al Tribunal Superior del Distrito, sobre aplicacion del principio de no retroactividad de las leyes, en el cumplimiento del decreto de 21 de Noviembre de 1867, relativo al pago de la pension de herencias trasversales.

1. A consecuencia de una queja elevada al C. Presidente de la República por el ciudadano Abogado Defensor de instruccion pública, la tercera Sala ha tenido la dignacion de mandarme que informe con justificacion dentro de tercero dia. Para cumplir con este respetable mandato, habria sido bastante el simple testimonio de las actuaciones que han motivado la queja; pues ellas por sí solas dan suficiente mérito para conocer la justificacion, y sobre todo, la buena fe con que se ha dictado la providencia, que muy á mi pesar, ha lastimado la bien sentada reputacion del Abogado Defensor: pero mi propio decoro, y el de la judicatura, que tal vez indignamente ejerzo, exigen que, al evacuar el informe, sea algo mas explicito en la exposicion de los hechos, y de los fundamentos legales en que apoyé mi providencia.

2. D. Evaristo Prieto y Hortal, de origen español, ántes de marchar á su país hizo testamento en esta ciudad por ante el notario público D. José Villela, en 29 de Enero de 1866. Por la cláusula 4.ª del referido testamento, legó á sus cuatro hermanos la cantidad de dos mil y quinientos pesos. Murió el testador en la ciudad de Sevilla en 5 de Enero de 1867, despues de su falleci-

miento se practicó una informacion *ad perpetuam*, á fin de que tanto la heredera como los legatarios pudiesen con toda seguridad, hacer valer sus derechos ante los tribunales de la República, por existir aqui la mayor parte de los bienes y los albaceas encargados de su distribucion. Dichos albaceas, por medio del agente de negocios D. Leandro Teija y Senande, apoderado de ellos con poder jurídico, se presentaron en el juzgado 4º que es á mi cargo, el 2 del último Mayo, solicitando licencia para la formacion de inventarios extrajudiciales. Concedida ésta, el Abogado Defensor de instruccion pública, pidió los autos, y al devolverlos acompañó la liquidacion respectiva, pidiendo que, previamente á la faccion de inventarios, supuestamente que los legados eran de cantidad, pagasen los legatarios al fondo de instruccion pública la pension de herencias trasversales, á razon del diez por ciento, conforme al decreto de 28 de Febrero de 1861, que era el vigente al verificarse la muerte del testador.

3. Con presencia de la ley de 21 de Noviembre del año próximo pasado, no aprobé dicha liquidacion, y mandé que los legatarios hermanos de D. Evaristo Prieto y Hortal pagasen la pension, á razon del diez por